¿Qué hemos aprendido sobre la maldición de los recursos?

¿Qué hemos aprendido sobre la maldición de los recursos?

Michael L. Ross

Annual Review of Political Science 18 (2015): 239–259.

> **Nota del compilador:** esta lectura corresponde al artículo de Ross (2015), "What Have We Learned about the Resource Curse?", *Annual Review of Political Science* 18: 239–259, DOI: 10.1146/annurev-polisci-052213-040359. Traducción de la versión de autor depositada en el repositorio eScholarship de la Universidad de California. Traducción íntegra al español sin resúmenes. Para citar, remitirse al DOI de la revista.

What Have We Learned about the Resource Curse? (¿Qué hemos aprendido sobre la maldición de los recursos?)

Michael L. Ross Departamento de Ciencia Política, Universidad de California, Los Ángeles, California 90095; correo electrónico: mlross@polisci.ucla.edu

Annu. Rev. Polit. Sci. 2015. 18:239–59

Publicado por primera vez en línea como Revisión Anticipada el 18 de diciembre de 2014

Palabras clave

democracia, democratización, guerra civil, instituciones, corrupción, recursos naturales, petróleo

La Annual Review of Political Science está en línea en polisci.annualreviews.org DOI de este artículo: 10.1146/annurev-polisci-052213-040359 © 2015 por Annual Reviews. Todos los derechos reservados

Resumen

Desde 2001, cientos de estudios académicos han examinado la "maldición política de los recursos", es decir, la afirmación de que la riqueza en recursos naturales tiende a afectar negativamente la gobernanza de un país. Hoy existe evidencia sólida de que un tipo de riqueza mineral, el petróleo, tiene al menos tres efectos nocivos: tiende a hacer más duraderos los regímenes autoritarios, a aumentar ciertos tipos de corrupción y a contribuir a desencadenar conflictos violentos en los países de ingresos bajos y medios. Los académicos también han avanzado hacia la comprensión de los mecanismos que conducen a estos resultados y de las condiciones que los hacen más probables. Este ensayo revisa la evidencia que respalda estas afirmaciones, los debates sobre su validez y algunos de los enigmas no resueltos para la investigación futura.

Introducción

¿Conduce la riqueza en recursos naturales a la disfunción política? De 2001 a 2013, cientos de estudios académicos abordaron esta cuestión. Hoy existe evidencia considerable de que bajo ciertas condiciones un tipo de riqueza en recursos —el petróleo— tiende a producir una "maldición política de los recursos". La maldición de los recursos podría definirse como los efectos adversos de la riqueza en recursos naturales de un país sobre su bienestar económico, social o político. El término fue utilizado por primera vez por escrito por el geógrafo económico Richard Auty en 1993 (Auty 1993). Durante la última década ha sido empleado tanto por académicos como por responsables de políticas públicas para explicar una amplia gama de males en los países ricos en recursos, particularmente en África, Oriente Medio, América Latina y la antigua Unión Soviética. El Banco Mundial, el G20 y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/UNDP) han lanzado nuevas iniciativas para detener la maldición de los recursos. Se han forjado dos acuerdos de múltiples partes interesadas: el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado nuevas leyes de transparencia diseñadas explícitamente para aliviar la maldición en los países exportadores de recursos. Decenas de organizaciones no gubernamentales, nuevas y antiguas, se han dedicado a esta cuestión.

La idea de una maldición de los recursos también ha influido en muchos debates de la ciencia política —por ejemplo, sobre las causas de las transiciones democráticas (Gassebner et al. 2012), el papel de la tributación en la construcción de Estados (Brautigam et al. 2008, Smith 2008), las consecuencias de la ayuda exterior (Bermeo 2011, Ahmed 2012) y los factores que afectan el inicio, la duración y la gravedad de la guerra civil (Fearon & Laitin 2003, Weinstein 2007). Una amplia literatura en economía pregunta cómo afecta la riqueza en recursos naturales al crecimiento económico (Wick & Bulte 2009, van der Ploeg 2011, Frankel 2012).

Este review examina los efectos políticos de las dotaciones de recursos, particularmente sobre la rendición de cuentas gubernamental, la calidad de las instituciones estatales y la incidencia de la guerra civil. Aborda tres preguntas:

- ¿Cuáles son los hallazgos más sólidos sobre estas cuestiones?
- ¿Cuáles son los principales desafíos a estos hallazgos y qué tan válidos son?
- ¿Cuáles son las brechas más importantes en nuestro conocimiento?

Sostengo a continuación que existe evidencia sólida de que un tipo de riqueza en recursos —el petróleo— tiene al menos tres efectos importantes: tiende a hacer más duraderos los regímenes autoritarios; conduce a una mayor corrupción; y contribuye a desencadenar conflictos violentos en los países de ingresos bajos y medios, particularmente cuando se ubica en el territorio de grupos étnicos marginados. Los efectos sobre el autoritarismo y el conflicto parecen ser fenómenos recientes, que emergieron después de la década de 1970.

Hay tres debates principales sobre estos efectos. El primero trata sobre las condiciones bajo las cuales el petróleo tiene estos efectos. Los académicos generalmente coinciden en que estos efectos son condicionales y, por tanto, limitados en alcance, pero no hay consenso sobre cuáles son esas condiciones. Una gran fracción de las condiciones hipotetizadas se mide de maneras colineales, lo que dificulta distinguirlas entre sí. Un segundo debate, relacionado, gira en torno a los mecanismos que generan estos efectos condicionales, aunque en una cuestión —la relación entre el petróleo y el conflicto civil— muchos estudios apuntan ahora a un proceso subyacente similar.

El tercer debate trata sobre si la maldición de los recursos es real o ilusoria. Aunque la mayoría de los estudios reportan evidencia de algún tipo de maldición de los recursos, una minoría significativa sugiere que la apariencia de una maldición de los recursos es un artefacto estadísti-

co creado por el sesgo de endogeneidad o de variables omitidas. Otros plantean una segunda objeción: que los efectos perjudiciales del petróleo pueden ser reales pero se ven contrarrestados por efectos benéficos que comúnmente se pasan por alto.[1]

Casi toda la investigación sobre la maldición de los recursos se basa en datos observacionales, lo que dificulta resolver estas disputas. También es difícil arbitrar afirmaciones sobre fenómenos que están mal medidos (como la calidad de las instituciones) o que se observan con poca frecuencia (como las guerras civiles). Aun así, sostengo que la primera objeción (que la apariencia de una maldición de los recursos se debe a variables endógenas u omitidas) queda contradicha por un amplio cuerpo de evidencia, mientras que la segunda objeción (que los efectos nocivos se ven compensados por otros benéficos) puede ser válida en ocasiones.

Algunos académicos han argumentado que hay en curso un cuarto debate, en el que quienes creen que la riqueza en recursos es incondicionalmente nociva y daña por igual a todos los Estados se oponen a quienes sugieren que solo es nociva bajo ciertas condiciones (Smith 2007, Morrison 2013, Waldner & Smith 2015). Sin embargo, es difícil encontrar un solo estudio académico que defienda la primera posición. Sería más preciso señalar que ha habido un cambio de énfasis: los estudios de finales de los años 1990 y principios de los 2000 prestaron más atención a identificar el efecto promedio del tratamiento de la riqueza en recursos naturales sobre una población de Estados; los estudios más recientes buscan explicar por qué los resultados varían en la población tratada. Las dos preguntas, no obstante, son partes complementarias de la misma agenda de investigación.

Este ensayo señala cuestiones que aún no están resueltas. Estas incluyen el alcance del efecto de los recursos, las condiciones bajo las cuales ocurre, los mecanismos que lo explican y la mejor manera de remediarlo. Se ha dedicado mucha atención al problema, pero prácticamente ninguna a la identificación de soluciones.

La mayoría de los estudios sobre la maldición de los recursos están limitados por la escasez de datos de alta calidad. Algunos de los datos que los académicos más fervientemente desean —por ejemplo, sobre el tamaño real y la disposición de los ingresos por recursos naturales, o la operación de las compañías petroleras estatales— suelen ser ocultados o mal reportados por los gobiernos. Hasta hace poco, la mayoría de los estudios se han basado en el análisis estadístico de grandes conjuntos de datos con una única observación para cada país y año —conjuntos de datos que han sido explotados hasta el punto de rendimientos de-

crecientes (y quizás más allá). Hay una tendencia prometedora hacia la investigación subnacional, donde los datos suelen ser mejores y las estrategias de identificación más convincentes. Sin embargo, no todas las preguntas son susceptibles de pruebas subnacionales; el efecto de la riqueza en recursos sobre la durabilidad autoritaria, por ejemplo, es sumamente difícil de probar con datos subnacionales.

La siguiente sección examina cómo los estudios de este tema definen y miden la parte de "recursos" de la "maldición de los recursos". Las tres secciones siguientes resumen la investigación sobre las maneras en que los recursos naturales afectan resultados clave: la democracia y la democratización, la calidad de las instituciones gubernamentales y la incidencia de la guerra civil. La sección final examina enigmas importantes para la investigación futura.

¿QUÉ SON LOS RECURSOS NATURALES Y CÓMO SE MIDEN?

Durante las últimas dos décadas, los académicos que estudian la maldición de los recursos han definido "recursos naturales" de docenas de maneras. Esto es tanto bueno como malo: significa que los investigadores han explorado muchas dimensiones potencialmente trascendentes de la riqueza en recursos, pero también les ha facilitado elegir entre medidas alternativas para generar un resultado dado.

Hay tres componentes en la mayoría de las definiciones de "recursos naturales". El primero es el tipo de recurso. Los primeros estudios de Sachs & Warner (1995) y Collier & Hoeffler (1998) examinaron medidas amplias de recursos que incluían el petróleo, otros minerales y productos agrícolas. Hoy en día, los productos agrícolas rara vez se consideran parte de la maldición de los recursos —tanto porque se producen, no se extraen (y por tanto no cumplen las definiciones estándar de recursos naturales), como porque rara vez se correlacionan con resultados desfavorables. Relativamente pocos estudios han examinado de cerca los efectos de los minerales no combustibles (Sorens 2011), los productos forestales (Price 2003, Harwell et al. 2011) y las materias primas en general (Besley & Persson 2011, Bazzi & Blattman 2013).

Solo un tipo de recurso se ha correlacionado de manera consistente con menos democracia y peores instituciones: el petróleo, que es la variable clave en la gran mayoría de los estudios que identifican algún tipo de maldición. Una gama más amplia de recursos —incluidos el petróleo, las piedras preciosas y otros tipos de minerales de alto valor— se ha relacionado con el conflicto civil. Varios estudios han intentado

explicar por qué diferentes recursos parecen tener consecuencias políticas distintas, pero ninguna explicación ha sido sometida a pruebas cuidadosas (Le Billon 2001, 2012; Ross 2003).

El segundo componente identifica la cualidad sobresaliente del recurso. Las opciones comunes incluyen la cantidad de producción, el valor de la producción, las rentas generadas por la producción y el valor de las exportaciones. Un número menor de estudios ha examinado el valor de las reservas de petróleo o minerales, los descubrimientos de petróleo, el número de trabajadores empleados en el sector de recursos, el agotamiento del recurso y los ingresos gubernamentales que genera.

El componente final es el método utilizado para normalizar estos valores. El analista elige si expresar la cantidad medida como una fracción del PIB, una fracción de las exportaciones totales, una fracción de los ingresos gubernamentales totales, por superficie territorial o sobre una base per cápita.

Estos tres componentes pueden combinarse de docenas de maneras para generar medidas alternativas de la dotación de recursos naturales de un país. No existe una única medida “mejor”; diferentes indicadores se centran en diferentes tipos de recursos y en diferentes propiedades de estos recursos, y por tanto pueden utilizarse para evaluar diferentes teorías.

Algunas medidas son endógenas a los resultados que supuestamente explican. Por ejemplo, una medida común —la dependencia de las exportaciones de petróleo, es decir, las exportaciones de petróleo como fracción del PIB— probablemente esté sesgada al alza en los países más pobres y más propensos a conflictos porque suelen ser demasiado empobrecidos para consumir el combustible que producen, lo que hace que exporten más de lo que de otro modo harían. Sobre una base per cápita, los Estados Unidos producen más petróleo que Nigeria, pero Nigeria es un exportador mientras que los Estados Unidos no lo es, porque los Estados Unidos son más ricos y consumen todo su petróleo internamente. Esto hace difícil interpretar, por ejemplo, las correlaciones entre la dependencia de las exportaciones de petróleo y la frecuencia del conflicto violento; ambas podrían verse impulsadas de manera independiente por la pobreza de un país.

Una de las medidas potencialmente más importantes también se encuentra entre las más difíciles de obtener: los ingresos gubernamentales del sector extractivo. Los Estados recaudan estos ingresos de diversas maneras: mediante regalías, impuestos corporativos, tasas de concesión, tasas de tránsito, bonos de firma, pagos en especie e ingresos de

empresas estatales. Diferentes tipos de ingresos pueden recaer en diferentes brazos del Estado —como los ministerios de petróleo y finanzas, las compañías petroleras estatales y los gobiernos locales— y pueden transferirse o no a una cuenta central. Los gobiernos también pueden ocultar sus ingresos de diversas maneras —por ejemplo, subestimando el valor del combustible que venden internamente. Incluso los indicadores de segunda mejor opción, incluida la medida de ingresos no tributarios del Banco Mundial, suelen no capturar gran parte de estos ingresos.[^2]

Para eludir estos problemas, los académicos han recurrido a medidas alternativas. El valor de la producción de petróleo per cápita (Ross 2008, 2012; Haber & Menaldo 2011), los choques de precios globales (Besley & Persson 2011, Ramsay 2011) y el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos (Cotet & Tsui 2013, Lei & Michaels 2014) han servido como instrumentos o medidas directas de la riqueza en recursos. Otros han utilizado datos sobre reservas de petróleo, el agotamiento del petróleo o el número de plataformas de perforación en funcionamiento, aunque estos datos están tanto mal medidos como a menudo son endógenos a los resultados de interés (Laherrère 2003, Tsui 2011).

Los escépticos de la maldición de los recursos sugieren que cualquier medida influida por las decisiones locales sobre la extracción de recursos —como el valor de la producción de petróleo, las exportaciones de petróleo, los ingresos petroleros o las reservas de petróleo— podría ser endógena a los resultados que nos importan, como el gobierno autoritario, la debilidad estatal o el conflicto violento. Si cualquiera de estos males hiciera que los países descubrieran más petróleo, o extrajeran sus reservas existentes más rápidamente, los observadores podrían hacer estimaciones sesgadas de los efectos de la riqueza petrolera y recibir una impresión incorrecta de una maldición de los recursos (Haber & Menaldo 2011, Wacziarg 2012). Sin embargo, los estudios empíricos muestran consistentemente que ocurre lo contrario: las malas condiciones políticas conducen a menos exploración y producción de petróleo, no a más. Bohn & Deacon (2000) demuestran que los países con instituciones poco democráticas y conflicto endémico tienden a ser malos riesgos de inversión para las empresas extractivas; por tanto, estos países tienden a tener tanto menos exploración como tasas de extracción más lentas, un hallazgo consistentemente confirmado por estudios posteriores (Cotet & Tsui 2013, Cust & Harding 2013, Poelhekke & van der Ploeg 2013, Metcalf & Wolfram 2014).

Las democracias ricas tienen alrededor de diez veces más inversión extranjera en todos los tipos de minería, por kilómetro cuadrado, que el mundo en desarrollo o los países de la antigua Unión Soviética (Ross

2012). Gracias a estas inversiones más grandes, los activos minerales registrados son aproximadamente 12 veces mayores per cápita en las democracias de altos ingresos que en los países de bajos ingresos (van der Ploeg 2011). Por tanto, los descubrimientos, las reservas y la producción de petróleo tienden a estar sesgados a la baja en los países con menos democracia y más conflicto. Si no hubiera maldición de los recursos, deberíamos observar menos riqueza petrolera, no más, en los países políticamente problemáticos.

RIQUEZA EN RECURSOS Y DEMOCRACIA

Muchos libros y artículos han analizado la relación entre la riqueza en recursos, especialmente la riqueza petrolera, y la rendición de cuentas gubernamental. La mayoría son ampliamente consistentes con la afirmación de que niveles más altos de riqueza petrolera hacen a los gobiernos autocráticos más estables y, por tanto, menos propensos a transitar hacia la democracia.

La Figura 1 resume la relación global entre la riqueza petrolera y las transiciones democráticas entre 1960 y 2008. El patrón sugiere que cuanto mayor es el ingreso petrolero de un país, menos probable ha sido que transite hacia la democracia. Los países que se volvieron democráticos tempranamente y permanecieron democráticos —por ejemplo, la República Dominicana, Turquía, Portugal y España— tenían poco o ningún petróleo. Un puñado de países con riqueza modesta en petróleo y gas, como Bolivia, Rumania y México, tuvo transiciones a la democracia más recientes (y a veces más erráticas); pero ningún país con ingresos por petróleo y gas mayores que los de México ha logrado volverse democrático con éxito desde 1960. La mayoría de los países en el extremo derecho del eje horizontal —Estados con mucho petróleo y sin transiciones democráticas— se encuentran en Oriente Medio y el norte de África; pero el grupo también incluye a Rusia, Angola, Gabón, Brunéi y Malasia.

La conexión entre la riqueza petrolera y el gobierno autocrático ha sido descrita durante mucho tiempo por los académicos de los países ricos en recursos, particularmente en Oriente Medio (Mahdavy 1970, Beblawi 1987, Crystal 1990, Bellin 1994, Gause 1994, Yates 1996, Chaudhry 1997, Vandewalle 1998). Los primeros estudios cuantitativos transnacionales incluyen a Barro (1999) y Ross (2001a).

El hallazgo central de que una mayor riqueza petrolera se asocia con menos democracia se ha replicado muchas veces, utilizando mejores datos y métodos cada vez más sofisticados; los estudios recientes reportan que es robusto al uso de efectos fijos de país (Aslaksen 2010, Tsui

2011, Andersen & Ross 2014) y de variables instrumentales (Ramsay 2011, Tsui 2011). Un análisis de límites extremos identificó la dependencia del petróleo como uno de los pocos correlatos robustos de los tipos de régimen (Gassebner et al. 2012). Un meta-análisis estadístico de la cuestión petróleo–democracia, que integró los resultados de 29 estudios y 246 estimaciones empíricas, concluyó que el petróleo tenía un efecto negativo, no trivial y robusto sobre la democracia (Ahmadov 2014). Prichard et al. (2014) revisitan esta cuestión, utilizando un conjunto de datos transnacional nuevo y muy mejorado sobre los ingresos por recursos y una amplia gama de pruebas econométricas; reportan que los ingresos gubernamentales procedentes de los recursos naturales tienen un efecto grande y estadísticamente robusto sobre la persistencia autocrática.

Gran parte de esta investigación ha intentado clarificar las condiciones bajo las cuales la riqueza petrolera tiene estos efectos antidemocráticos. Hay dos posibilidades generales: el petróleo podría fortalecer a los gobiernos autoritarios y evitar que transiten hacia la democracia; y podría debilitar a los gobiernos democráticos y empujarlos hacia el autoritarismo. La mayoría de los estudios sobre esta cuestión encuentran apoyo para la primera condición, pero los resultados sobre la segunda condición son mixtos.

La primera condición también es consistente con la investigación sobre la supervivencia en el cargo de los líderes autoritarios, más que de los regímenes autoritarios. Tanto Cuaresma et al. (2010) como Andersen & Aslaksen (2013) muestran que la riqueza petrolera prolonga la supervivencia en el cargo de los gobernantes autoritarios; Andersen & Aslaksen también encuentran que los diamantes de kimberlita tienen un efecto similar, mientras que los diamantes aluviales y otros tipos de minerales pueden reducir la longevidad de los líderes y partidos autoritarios. Examinando exclusivamente a los Estados africanos, Omgba (2009) encuentra que el petróleo, pero no otros recursos minerales, ayuda a los titulares a permanecer en el cargo. Bueno de Mesquita & Smith (2010) reportan que las rentas de los recursos naturales ayudan a los líderes autoritarios tanto a evitar las amenazas revolucionarias como a sobrevivirlas cuando ocurren.

Varios estudios también concluyen que el petróleo hace a las autocracias más autocráticas, al reducir la libertad de prensa (Egorov et al. 2009) y al obstaculizar el surgimiento de una legislatura autoritaria (Gandhi & Przeworski 2007). Según Wright et al. (2015), los aumentos en la riqueza petrolera ayudan a los regímenes autocráticos a repeler a otros retadores autocráticos.

El impacto de la riqueza petrolera en las democracias es más ambiguo. Un conjunto de estudios reporta que el petróleo tiene efectos prodemocráticos en las democracias, ya sea haciendo a los gobiernos más estables (y por tanto menos propensos a volverse autocracias) o mejorando sus puntuaciones de democracia (Smith 2004, Dunning 2008, Morrison 2009, Tsui 2011).[^3] De ahí que Smith (2004) argumente que el petróleo podría caracterizarse mejor como "proestabilidad de régimen" que como "antidemocrático", puesto que ayuda tanto a las autocracias como a las democracias a sobrevivir.

Pero un segundo grupo de estudios no encuentra evidencia de que el petróleo ayude a estabilizar los regímenes democráticos (Ulfelder 2007, Caselli & Tesei 2011, Al-Ubaydli 2012, Wiens et al. 2014) o a los gobernantes (Andersen & Aslaksen 2013). Y un tercer grupo, más pequeño, sugiere que el efecto del petróleo sobre la estabilidad democrática es condicional: podría estabilizar a las democracias que son ricas y tienen instituciones sólidas, pero fomentar el colapso de la rendición de cuentas en las democracias más pobres o con instituciones más débiles (Jensen & Wantchekon 2004, Ross 2012).

Han surgido nuevos conocimientos sobre esta cuestión a partir de estudios subnacionales en democracias y semidemocracias, incluidos Argentina (Gervasoni 2010), Brasil (Brollo et al. 2013, Monteiro & Ferraz 2010), India (Asher & Novosad 2014), Irán (Mahdavi 2015) y los Estados Unidos (Goldberg et al. 2008, Wolfers 2009). Todos estos estudios encuentran que los ingresos inesperados del petróleo (o, en los estudios de Brollo et al. y de Gervasoni, transferencias federales similares a ingresos inesperados) tienden a alargar los mandatos en el cargo de los funcionarios locales electos.

Dos de estos estudios también sugieren que la mayor ventaja del titular va acompañada de una caída en la calidad de los candidatos. En Brasil, Brollo et al. (2013) encuentran que las transferencias federales similares a ingresos inesperados que son plausiblemente exógenas a las condiciones locales aumentan simultáneamente las tasas de reelección y reducen los niveles educativos de los candidatos a alcalde. En las regiones ricas en minerales de la India, Asher & Novosad (2014) reportan que los choques de precios globales conducen tanto a ventajas del titular en las elecciones locales como a victorias más frecuentes de candidatos con antecedentes penales.

Los siete estudios subnacionales sugieren que los ingresos inesperados en contextos democráticos o semidemocráticos tienen efectos pro-titular. Si esto debe verse como una estabilización de la democracia o un socavamiento de la misma es, en parte, una cuestión de interpretación.

Los investigadores también han intentado identificar condiciones adicionales entre las autocracias que atenúan o exacerban los efectos del petróleo. Varios estudios argumentan que mucho depende de la capacidad del gobernante para capturar las rentas de los recursos disponibles (Snyder & Bhavnani 2005, Boschini et al. 2007, Greene 2010). Ross (2012) hace un argumento similar y lo sitúa en un contexto histórico. Su trabajo sugiere que el petróleo solo adquirió fuertes poderes antidemocráticos a finales de los años 1970, después de que la mayoría de los países en desarrollo ricos en petróleo nacionalizaran sus industrias petroleras, lo que dio a los líderes políticos un acceso mucho mayor a las rentas. De 1960 a 1979, los Estados petroleros y los no petroleros tenían la misma probabilidad de transitar hacia la democracia; después de 1979, los Estados no petroleros tenían casi tres veces más probabilidades de realizar transiciones democráticas (Ross 2012).

Dunning (2008) argumenta en favor de un tipo diferente de influencia condicional, sugiriendo que el petróleo obstaculiza la democratización en los países con bajos niveles de desigualdad, pero acelera la democratización en los países con altos niveles de desigualdad al aliviar la preocupación de las élites ricas de que la democracia conduzca a la expropiación de sus activos privados. Esta es la razón por la que, según Dunning, el petróleo tuvo efectos prodemocráticos en América Latina pero efectos antidemocráticos en el resto del mundo. Según Smith (2007), la variable interviniente clave es el momento del auge petrolero. Si ocurre antes de que un régimen autoritario haya desarrollado un partido gobernante o coalición fuerte, es poco probable que cree estabilidad; si llega después de la creación de un partido gobernante o coalición fuerte, se vuelve más probable que fomente la estabilidad autoritaria.

Muchos estudios buscan identificar los mecanismos que vinculan más petróleo con menos democracia. Quizás el argumento más común sea el del “efecto rentista”: un flujo abundante de ingresos petroleros permite a los titulares tanto reducir impuestos como aumentar el clientelismo y los bienes públicos, lo que les hace posible comprar a un conjunto más amplio de posibles retadores y reducir la disidencia (Mahdavy 1970, Crystal 1990, Ross 2001a). Un supuesto importante es que los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios tienen efectos diferentes sobre la estabilidad autoritaria. Cuando los gobiernos no democráticos imponen impuestos más altos (o reducen subsidios), a menudo se

enfrentan a demandas de mayor rendición de cuentas; cuando obtienen mayores ingresos no tributarios, pueden reducir la tributación y, por tanto, atenuar estas demandas (Bates & Lien 1985, Ross 2004a, Brautigam et al. 2008).

Varios estudios han puesto a prueba versiones del mecanismo rentista con datos transnacionales. Morrison (2009) reporta que el ingreso no tributario se asocia con una mayor estabilidad de régimen tanto en las autocracias como en las democracias, pero a través de caminos algo diferentes: conduce a un mayor gasto social en las autocracias pero a una menor tributación de las élites en las democracias. Según Ross (2012), hay apoyo estadístico para el mecanismo rentista en los datos transnacionales disponibles, pero las correlaciones son algo frágiles, quizás debido a datos inexactos y faltantes.

Un puñado de estudios ha examinado el efecto rentista con datos subnacionales. McGuirk (2013) utiliza datos de encuestas a nivel micro de 15 países del África subsahariana y encuentra fuertes correlaciones dentro de los países entre el aumento de las sumas de las rentas de los recursos naturales, las disminuciones en el cumplimiento (percibido) de la tributación y los descensos en la demanda de gobernanza democrática. Uno de los pocos experimentos de campo sobre la maldición de los recursos, que involucró a 1.863 aldeanos del distrito de Blora, en Indonesia, encontró que un tratamiento de "tributación" condujo a un mayor monitoreo de los funcionarios públicos, pero que un tratamiento de "ingreso inesperado" no lo hizo (Paler 2013).

El modelo rentista supone que la riqueza en recursos no afecta las preferencias de los gobernantes, solo su capacidad fiscal para actuar según esas preferencias. Un conjunto alternativo de enfoques —explorado formalmente por Robinson et al. (2006), Morrison (2007) y Caselli & Cunningham (2009), e informalmente por Fish (2005)— sugiere que los recursos afectan el valor que los líderes otorgan a permanecer en el cargo, más que sus capacidades. Según estos modelos, la disponibilidad de rentas de los recursos hace más valiosa la permanencia en el cargo, induciendo a un gobernante a invertir más en actividades de preservación del régimen.

Muchas teorías adicionales conectan el petróleo con la autocracia o la permanencia en el cargo. Los autócratas ricos en petróleo pueden invertir más fuertemente en represión (Ross 2001a, Cotet & Tsui 2013) o gastar más en el ejército para mantenerlo leal si ocurriera un levantamiento (Wright et al. 2015). El petróleo podría ayudar a los líderes no democráticos a conseguir el apoyo extranjero que necesitan para repeler a los retadores (Rajan 2011). La calidad fija de los recursos minera-

les podría hacer más difícil para las élites de los Estados autoritarios transferir su riqueza al extranjero, lo que podría llevarlas a oponerse más vigorosamente a las reformas democráticas (Boix 2003). Las rentas petroleras podrían impulsar la inmigración, lo que puede mejorar la capacidad del gobierno para bloquear los movimientos democráticos (Bearce & Hutnick 2011).

Ha habido tres tipos de desafíos a la afirmación de que el petróleo prolonga las autocracias. El primero proviene de estudios que ponen a prueba una versión alternativa de la maldición de los recursos. La mayoría de las afirmaciones sobre los efectos del petróleo se centran en los niveles: niveles más altos de riqueza petrolera conducen a regímenes autoritarios más duraderos. Sin embargo, una cuestión igualmente interesante es si los cambios en los niveles de riqueza petrolera conducen a cambios en los niveles de democracia. No hay razón para suponer que los niveles y los cambios tengan efectos idénticos. Por ejemplo, los niveles de ingreso más altos se asocian con un aumento en la probabilidad de una transición democrática, pero los cambios en estos niveles (es decir, el crecimiento económico) tienen el efecto opuesto (Miller 2012, Treisman 2013).

Varios estudios recientes utilizan enfoques estadísticos que se centran en los cambios en la riqueza petrolera. Todos reportan que estos cambios no están correlacionados con cambios posteriores en la rendición de cuentas democrática (Haber & Menaldo 2011, Brückner et al. 2012, Wacziarg 2012, Liou & Musgrave 2013). Varios interpretan estos hallazgos como evidencia de que no existe la maldición de los recursos. Sin embargo, los estudios posteriores que modelan simultáneamente los efectos de los niveles de riqueza petrolera y los cambios en la riqueza petrolera sugieren que ambos lados pueden tener razón. Los niveles más altos tienden a obstaculizar la democracia, mientras que los aumentos a corto plazo en estos niveles no tienen un efecto consistente (Andersen & Ross 2014, Wright et al. 2015).

Una manera de reconciliar estos hallazgos con el resto de la literatura es distinguir entre los efectos a corto plazo del petróleo (que están representados por los cambios) y los efectos a largo plazo (que están representados por los niveles). Los ingresos inesperados temporales podrían hacer a un dictador más popular en el corto plazo, pero ser insuficientes para protegerlo de las fuerzas democráticas cuando los ingresos caen; Monteiro & Ferraz (2010), por ejemplo, encontraron que los ingresos inesperados petroleros a nivel municipal en Brasil ayudaron a los titulares a permanecer en el poder, pero solo a través de un solo ciclo electoral.

Quizás los autócratas que desean consolidar sus regímenes necesiten al menos varios años de altos ingresos petroleros para desarrollar instituciones distribuidoras de rentas duraderas y eficaces. También podrían necesitar tiempo para acumular un superávit de ingresos en sus fondos de estabilización o de riqueza soberana, lo que les permitiría mantener el apoyo cuando se enfrenten a retadores fuertes —un proceso modelado por Bueno de Mesquita & Smith (2010). Si es así, las fluctuaciones de ingresos a corto plazo importarían poco, mientras que los niveles de ingresos petroleros importarían mucho. Esto sería consistente con los hallazgos de Wiens et al. (2014), quienes reportan que la dependencia de los recursos tiene un efecto modesto a corto plazo pero un efecto grande a largo plazo sobre la supervivencia de las autocracias. Tal conclusión también sería respaldada por Prichard et al. (2014), quienes encuentran que los estimadores que se basan en primeras diferencias (y por tanto capturan los efectos a corto plazo) muestran correlaciones relativamente débiles entre los ingresos por recursos y la autocracia, [^4] mientras que los estimadores que se centran en las diferencias de niveles (y por tanto capturan efectos a más largo plazo) encuentran correlaciones mucho más fuertes.[^5]

El segundo desafío a las afirmaciones de un vínculo petróleo–autocracia es la identificación causal. Concebiblemente, la correlación entre la riqueza petrolera y la gobernanza autocrática podría ser endógena o estar impulsada por variables omitidas. Haber & Menaldo (2011), Gurses (2011) y Wacziarg (2012) utilizan todos este argumento para explicar por qué los cambios en el ingreso petrolero parecen no tener efecto sobre la democracia.

Sin embargo, hay otras maneras de interpretar estos análisis. Andersen & Ross (2014) argumentan que Haber & Menaldo se niegan a poner a prueba la versión de la hipótesis de la maldición de los recursos más ampliamente respaldada (es decir, que los niveles más altos de ingresos petroleros ayudan a las autocracias a permanecer en el poder); que extraen inferencias inválidas de sus datos longitudinales; y que no tienen en cuenta los cambios a lo largo del tiempo en la distribución global de las rentas del petróleo. Según Andersen & Ross, la riqueza petrolera solo se convirtió en un obstáculo para las transiciones democráticas después de las expropiaciones de los años 1970, que permitieron a los gobiernos de los países en desarrollo capturar las rentas petroleras que antes eran desviadas por las empresas de propiedad extranjera. Muestran que los resultados estadísticos de Haber & Menaldo —que emplean datos que cubren el período de 1800 a 2006— pueden revertirse simplemente añadiendo a los modelos una variable ficticia para el período posterior a 1980. Wright et al. (2015) confirman este hallazgo, reportando que los niveles más altos de riqueza petrolera disuadieron

las transiciones democráticas entre 1980 y 2007, pero no entre 1947 y 1979. Wright et al. también muestran que una pieza crítica del análisis de Haber & Menaldo estaba sesgada por el uso de una muestra que excluía 51 países autocráticos, incluidos todos los Estados ricos en petróleo que nunca han realizado transiciones democráticas.

El desafío final plantea preguntas sobre el impacto neto de la riqueza petrolera. Incluso si el petróleo tiene un efecto directo negativo sobre las transiciones democráticas, esto podría verse contrarrestado por un efecto indirecto positivo producido a través de los ingresos más altos que la riqueza petrolera tiende a acarrear. Herb (2005) discutió primero esta posibilidad y sugirió que estos dos efectos podrían anularse mutuamente, dejando al petróleo sin efecto neto sobre el tipo de régimen de un país. Alexeev & Conrad (2009, 2011) abordan el mismo problema pero utilizan una estrategia empírica diferente para estimar el tamaño del efecto indirecto; a diferencia de Herb, concluyen que los efectos antidemocráticos directos del petróleo son más fuertes que sus efectos prodemocráticos indirectos, lo que sugiere que el efecto neto sigue siendo antidemocrático.

Resolver esta cuestión es difícil porque el impacto de la riqueza petrolera sobre los ingresos no es sencillo. Muchos argumentan que es condicional a la calidad ex ante de las instituciones del gobierno (Mehlum et al. 2006), el tipo de instituciones democráticas (Andersen & Aslaksen 2008), la apertura al comercio (Arezki & van der Ploeg 2011), el nivel de capital humano (Kurtz & Brooks 2011), la "función de supervivencia" de los líderes políticos (Caselli & Cunningham 2009) u otros factores (Torvik 2009). El petróleo también podría tener otros efectos indirectos —positivos o negativos— que complican aún más nuestra capacidad para determinar su impacto neto sobre los niveles de ingreso. Hay poca duda de que los países con concentraciones extremas de riqueza petrolera (por ejemplo, Arabia Saudita) son mucho más ricos de lo que de otro modo serían; pero el efecto neto de niveles más moderados de riqueza petrolera (por ejemplo, la de Nigeria) sobre los ingresos de los países no es evidente.

En resumen, existe evidencia sólida de que los niveles más altos de riqueza petrolera ayudan a los regímenes autoritarios, y a los gobernantes autoritarios, a repeler las presiones democráticas. Estos efectos se atribuyen comúnmente a un mecanismo rentista, aunque otros mecanismos y condiciones también podrían importar. Las fluctuaciones de ingresos a corto plazo parecen hacer poca diferencia. Aunque varios estudios han desafiado estos patrones, tanto un meta-análisis como una prueba de límites extremos parecen confirmar la robustez de la

relación petróleo–autocracia. E incluso los modelos de escépticos como Haber & Menaldo (2011) parecen indicar la existencia de una maldición de los recursos en el período posterior a 1979.

RECURSOS E INSTITUCIONES

La segunda rama de la literatura sobre la maldición de los recursos examina la relación entre la riqueza en recursos y la calidad de las instituciones, es decir, la eficacia de la burocracia gubernamental, la incidencia de la corrupción, el estado de derecho y, más ampliamente, la capacidad del Estado para promover el desarrollo económico. Una vez más, el petróleo se asocia a menudo con resultados nocivos, mientras que otros recursos minerales normalmente no lo hacen. La mayor parte de esta investigación se inscribe en una de dos categorías.

La primera examina las maneras en que la calidad institucional puede condicionar los efectos de la riqueza en recursos sobre el crecimiento económico. Tornell & Lane (1999) desarrollan un modelo que muestra cómo un Estado con instituciones débiles, al recibir un choque fiscal positivo (como un auge de recursos), puede sufrir un "efecto de voracidad" en el que grupos poderosos compiten por el ingreso inesperado, lo que conduce finalmente a una reducción del crecimiento. Mehlum et al. (2006) argumentan que los efectos de los recursos naturales sobre el desempeño económico son condicionales a la calidad de las instituciones estatales: donde las instituciones son "favorables a los depredadores" (y más propensas a la corrupción), la riqueza en recursos tiende a reducir el ingreso agregado; donde son "favorables a los productores" (y menos propensas a la corrupción), eleva el ingreso agregado. Robinson et al. (2006) desarrollan un argumento paralelo, sugiriendo que cuando las instituciones son débiles ex ante, los auges de recursos se disipan a través del empleo público excesivo y el clientelismo; pero cuando las instituciones fomentan una gobernanza que rinde cuentas y es competente, los auges de recursos son beneficiosos.

La segunda corriente de investigación pregunta si la riqueza en recursos naturales puede dañar, o entorpecer la evolución beneficiosa de, las instituciones mismas; en otras palabras, trata la calidad institucional como endógena a las dotaciones de recursos. Muchos estudios de este segundo grupo reportan que la riqueza petrolera o las medidas agregadas de riqueza en recursos se correlacionan inversamente con medidas de calidad institucional (Bulte et al. 2005, Isham et al. 2005, Beck & Laeven 2006, Knack 2009, Anthonsen et al. 2012, Sala-i-Martin & Subramanian 2013). Wiens (2013) desarrolla un modelo formal que combina

las perspectivas exógena y endógena, mostrando cómo las malas instituciones pueden conducir a una maldición de los recursos, que a su vez hace que las instituciones de baja calidad persistan.

Hay muchas teorías sobre cómo la riqueza en recursos podría perjudicar la calidad institucional. Los altos niveles de ingresos por recursos podrían, por ejemplo, obstaculizar la capacidad de un Estado para extraer impuestos de sus ciudadanos, dejando al gobierno "débil", vulnerable a la búsqueda de rentas e incapaz de desarrollar políticas económicas sólidas (Beblawi 1987, Chaudhry 1989, Karl 1997); desalentar a los políticos de invertir en la capacidad burocrática del Estado (Besley & Persson 2010); alentar a candidatos de menor calidad a competir por los cargos públicos (Brollo et al. 2013); e inducir a los políticos a desmantelar instituciones bien funcionantes que regulan el uso de los recursos naturales, con el fin de obtener acceso a las rentas (Ross 2001b). La volatilidad de estos ingresos podría acortar el horizonte de planificación de un gobierno y socavar las inversiones importantes (Karl 1997), mientras que los ingresos inesperados podrían hacer que los ingresos de un gobierno se expandieran más rápido que su capacidad para gestionarlos de manera eficiente (Hertog 2007, Ross 2012).

Los académicos han hecho esfuerzos especiales para examinar la asociación entre los recursos naturales y la corrupción. Varios estudios, que utilizan regresiones transnacionales o de panel, encuentran fuertes correlaciones entre la dependencia de los recursos naturales y las percepciones de corrupción (Leite & Weidmann 1999, Arezki & Brückner 2011, Sala-i-Martin & Subramanian 2013). Para medir mejor la corrupción, Andersen et al. (2012) utilizan un conjunto de datos único que rastrea los depósitos extranjeros en los bancos de los paraísos fiscales; muestra que cuando las autocracias (pero no las democracias) experimentan un aumento en las rentas del petróleo y el gas, hay un aumento correspondiente en las transferencias a estos paraísos fiscales.

Los estudios subnacionales también encuentran evidencia de un vínculo petróleo–corrupción. Utilizando encuestas de hogares, Vicente (2010) reporta que el descubrimiento de petróleo en Santo Tomé y Príncipe fue seguido por un gran aumento en la corrupción percibida en muchos servicios públicos. Brollo et al. (2013) emplean un diseño de regresión discontinua para identificar los efectos de las transferencias del gobierno federal de Brasil a los gobiernos municipales; concluyen que un aumento del 10% en estas transferencias similares a ingresos inesperados se asocia con un aumento de 10 a 12 puntos porcentuales en la corrupción encontrada por el programa de auditoría aleatoria del gobierno federal. Un segundo estudio de municipios brasileños (Caselli &

Michaels 2013) encontró que los aumentos plausiblemente exógenos en los ingresos petroleros se asociaban con un mayor gasto en bienes y servicios públicos; sin embargo, gran parte de este dinero desapareció y lo más probable es que fuera absorbido por una combinación de mayor clientelismo y malversación por parte de los altos funcionarios. Zhu & Wu (2014) encuentran que las empresas mineras en China realizan pagos corruptos a los funcionarios públicos con una frecuencia inusual.

El impacto de la riqueza en recursos sobre las instituciones también puede ser condicional. Andersen et al. (2012), Bhattacharya & Hodler (2010) y Arezki & Gylfason (2013) ofrecen evidencia de que los recursos naturales tienen más probabilidades de conducir a la corrupción en las autocracias que en las democracias. La propiedad gubernamental también podría ser importante. Luong & Weinthal (2010) estudian cinco Estados ricos en petróleo de la antigua Unión Soviética (Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y concluyen que la riqueza petrolera solo conduce a instituciones estatales debilitadas cuando el gobierno tiene un papel dominante en la industria petrolera; cuando el sector privado y los inversores extranjeros tienen un papel más prominente, es probable que los gobiernos tengan instituciones fiscales más fuertes.

Las afirmaciones sobre la riqueza petrolera y las instituciones han enfrentado las mismas dos preguntas que el resto de la literatura sobre la maldición de los recursos: si las correlaciones observadas son realmente causales; y si los efectos directos y nocivos de la riqueza en recursos se ven contrarrestados por efectos indirectos y benéficos. Busse & Gröning (2013) se centran en el primer problema. Utilizando variables instrumentales para abordar la endogeneidad y efectos fijos de país para dar cuenta de las variables omitidas, reportan que la riqueza en recursos se asocia con una mayor corrupción pero no con otros indicadores de calidad institucional. Alexeev & Conrad (2009, 2011) se centran en el segundo problema y reportan que, una vez que los efectos contrapuestos del petróleo sobre el ingreso han sido plenamente tenidos en cuenta, el impacto perjudicial de la riqueza en recursos sobre la mayoría de las medidas de calidad institucional desaparece; solo permanecen los efectos perversos de la riqueza petrolera sobre la democracia. Kennedy & Tiede (2013) también examinan el problema de los efectos netos, realizando un análisis de límites extremos y empleando 19 indicadores de calidad institucional. Encuentran poca evidencia de que el petróleo sea perjudicial para la calidad institucional.

La relación entre la riqueza en recursos y la calidad institucional es excepcionalmente difícil de desenredar. La calidad institucional suele estar mal medida, y las instituciones podrían simultáneamente afectar y ser afectadas por la riqueza en recursos. Sin embargo, incluso si los hallazgos de la literatura transnacional se descartan, varios estudios subnacionales bien diseñados ofrecen evidencia convincente de que los ingresos inesperados de recursos han conducido a una mayor corrupción, lo que sugiere que al menos bajo ciertas condiciones, la riqueza en recursos puede perjudicar a las instituciones gubernamentales.

Este hallazgo tiene implicaciones de política preocupantes. Muchos profesionales coinciden —implícita o explícitamente— con el argumento de Mehlum et al. (2006) de que los países en desarrollo necesitan instituciones sólidas y eficaces para convertir su riqueza en recursos naturales en un crecimiento amplio y sostenible. Sin embargo, si estas instituciones mediadoras resultan dañadas por los ingresos inesperados de recursos, escapar de una maldición de los recursos se vuelve mucho más difícil.

RECURSOS Y GUERRA CIVIL

La tercera rama principal de investigación examina los efectos de la riqueza en recursos naturales sobre la guerra civil. En algunos aspectos se asemeja a las otras ramas: reúne trabajo cuantitativo transnacional y estudios de caso cualitativos e informados teóricamente (Collier & Sambanis 2005, Kaldor et al. 2007, Omeje 2008); la mayoría de los estudios publicados identifican un efecto nocivo, aunque condicional; y no hay consenso sobre los mecanismos causales.[2]

Hay, sin embargo, tres diferencias importantes entre esta y las otras dos ramas. Primero, otros tipos de recursos naturales parecen importar. Solo el petróleo se correlaciona consistentemente con menos democracia y más corrupción, pero tanto el petróleo como otros recursos minerales se han asociado estadísticamente con el inicio o la duración de la guerra civil. Estos recursos incluyen los diamantes aluviales (Ross 2003, 2006; Lujala et al. 2005), otras piedras preciosas aluviales (Fearon 2004), otros minerales no combustibles (Collier et al. 2009, Besley & Persson 2011, Sorens 2011) y bienes de “contrabando” como las hojas de coca (Angrist & Kugler 2008). El papel de la madera en varios conflictos violentos se ha explorado a nivel de estudio de caso (Price 2003, Harwell et al. 2011). Aun así, la relevancia de los recursos no combustibles está lejos de estar zanjada; Ross (2006) señala que la correlación entre los diamantes aluviales y la guerra civil se basa en un puñado de conflictos de los años 1990 y es estadísticamente frágil.

La segunda diferencia es que los efectos de la riqueza en recursos sobre la guerra civil parecen ser no monótonos. Los efectos de la riqueza petrolera sobre el gobierno autoritario y la corrupción parecen ser aproximadamente lineales: más petróleo conduce a peores resultados. Pero la relación entre la riqueza en recursos naturales y el inicio del conflicto violento se asemeja en cambio a una U invertida: a medida que aumenta el valor de la riqueza en recursos, el riesgo de conflicto primero sube y luego baja (Collier & Hoeffler 1998, Basedau & Lay 2009, Collier et al. 2009, Bjorvatn & Naghavi 2011).[3] Las interpretaciones de este patrón varían, pero la mayoría se asemejan mucho al argumento original de Collier & Hoeffler (1998) de que cuando la riqueza en recursos alcanza niveles muy altos se convierte en una fuerza estabilizadora, que permite al gobierno central…

La tercera diferencia es que la ubicación del recurso importa. Cuando los estudios no tienen en cuenta la ubicación, a veces no logran encontrar correlaciones significativas entre el petróleo y el conflicto (Bazzi & Blattman 2013, Cotet & Tsui 2013). Cuando sí tienen en cuenta la ubicación, los resultados suelen cambiar. Cuando el petróleo se encuentra en alta mar, no tiene un efecto robusto sobre el riesgo de conflicto de un país; cuando está en tierra firme, parece tener un gran efecto (Lujala 2010, Ross 2012). La ubicación precisa en tierra firme también marca la diferencia: es más probable que el petróleo provoque conflicto cuando se encuentra en regiones pobres en relación con el promedio nacional (Østby et al. 2009) y pobladas por grupos étnicos marginados (Basedau & Richter 2014, Hunziker & Cederman 2012); cuando está situado en una región con un grupo étnico altamente concentrado (Morelli & Rohner 2014); y cuando los empresarios de minorías étnicas lo utilizan para promover la resistencia colectiva al gobierno central (Aspinall 2007). Algunos de estos hallazgos también se aplican a los diamantes aluviales, y todos parecen consistentes con Esteban et al. (2012), quienes informan que es más probable que la riqueza en recursos desencadene conflictos en países caracterizados por una intensificada fragmentación y polarización étnica. Cuando los conflictos tienen lugar cerca de regiones con riqueza en petróleo o diamantes aluviales, también parecen durar más (Lujala et al. 2005, Buhaug et al. 2009, Lujala 2010) y volverse más severos (Weinstein 2007, Lujala 2009, Maystadt et al. 2014).[4]

La prominencia de la ubicación ha facilitado que los estudiosos exploren la relación entre los recursos y el conflicto a nivel subnacional y empleen estrategias de identificación más satisfactorias. Un estudio encontró que durante la guerra civil de Sierra Leona los cacicazgos con minas de diamantes sufrieron ataques y batallas más frecuentes (Bello-

ws & Miguel 2009). Un segundo estudio mostró que los shocks globales al precio del tantalio fueron seguidos por un aumento de la violencia en África cerca de las minas de tantalio (Miner 2013). Un tercer estudio utilizó datos a nivel municipal de Colombia para estimar los efectos de los shocks de precios tanto del café como del petróleo sobre la severidad de la violencia rebelde y paramilitar; encontró que los shocks de precios del café tienden a reducir la violencia en las regiones productoras de café (quizás al extraer mano de obra del conflicto y llevarla al sector cafetero), mientras que los shocks de precios del petróleo tienden a aumentar la violencia en las regiones ricas en petróleo (posiblemente al crear oportunidades más lucrativas para la depredación) (Dube & Vargas 2013). Estos últimos hallazgos se asemejan estrechamente a las implicaciones de un modelo de Dal Bó & Dal Bó (2011) en el que los shocks exógenos pueden aumentar o disminuir los riesgos de conflicto, dependiendo de si ocurren en sectores intensivos en mano de obra o en sectores intensivos en capital.

La importancia de la ubicación también ha facilitado distinguir entre explicaciones rivales de la correlación recursos–conflicto. Un conjunto de teorías sugiere que la riqueza en recursos naturales conduce a la violencia al afectar al gobierno, ya sea haciéndolo administrativamente más débil y, por tanto, menos capaz de prevenir rebeliones, o aumentando el valor de capturar el Estado y, en consecuencia, induciendo nuevas rebeliones (de Soysa 2002, Fearon & Laitin 2003, Le Billon 2005).

Un segundo conjunto de teorías sostiene que los recursos naturales conducen al conflicto al afectar a los insurgentes, no a los gobiernos: los rebeldes de una región étnicamente marginada podrían estar motivados por la perspectiva de establecer un Estado independiente, de modo que los ingresos por recursos generados localmente no se compartieran con el resto del país; o los rebeldes podrían financiar los costos de la rebelión ya sea saqueando el recurso mismo o extorsionando dinero a las empresas y trabajadores que operan en su territorio (Collier et al. 2009, Dal Bó & Dal Bó 2011, Ross 2012).

También existe un tercer conjunto de teorías, que se centran en las interacciones entre gobiernos y rebeldes. El modelo desarrollado por Besley & Persson (2011) sugiere que las rentas de los recursos aumentan la probabilidad de conflicto, condicionada a la incapacidad del Estado para facilitar transacciones pacíficas entre grupos. El modelo de duración de la guerra civil de Fearon (2004) sugiere que los gobiernos dependientes de los recursos no pueden hacer compromisos creíbles de redistribuir la riqueza en recursos a las comunidades locales, porque la volatilidad de los precios de los recursos hace que la fortaleza

del Estado aumente y disminuya; esto les dificulta alcanzar acuerdos pacíficos con los grupos insurgentes, particularmente cuando los rebeldes pueden financiarse capturando contrabando.

Si el primer conjunto de teorías es correcto, entonces tanto la riqueza petrolera en tierra firme como en alta mar debería tener los mismos efectos inductores de conflicto: debilitar la capacidad del Estado de defenderse a sí mismo o agrandar el tamaño de su "tarro de miel". Si el segundo o el tercer conjunto es correcto, el petróleo debería conducir al conflicto solo cuando se encuentra en tierra firme, donde puede ser reclamado por separatistas locales o atacado por rebeldes necesitados de efectivo. Dado que solo el petróleo en tierra firme está asociado con mayores riesgos de conflicto, el primer enfoque parece estar equivocado. El petróleo conduce a la guerra civil, al menos en parte, a través de sus efectos sobre los grupos insurgentes. Tanto Glynn (2009) como Kennedy & Tiede (2013) también informan que la vía de la "debilidad del Estado" no puede explicar el vínculo entre el petróleo y la guerra civil.

Una vez más, varios estudios plantean preguntas sobre si la correlación recursos–conflicto es realmente causal y si los efectos nocivos de la abundancia de recursos son mitigados por los beneficiosos. Brunnschweiler & Bulte (2009) abordan ambas cuestiones. Utilizando la medida del Banco Mundial del stock total de capital natural para instrumentar la dependencia de recursos, no encuentran correlación con los inicios de conflicto. Sin embargo, su instrumento solo está disponible para dos años y 100 países, y su enfoque ha sido cuestionado (Van der Ploeg & Poelhekke 2010).

Cotet & Tsui (2013) también instrumentan la riqueza en recursos, usando una medida singular de descubrimientos de petróleo, con una cobertura mucho mejor de países y años. Informan que la riqueza en petróleo instrumentada está asociada con inicios de conflicto en un entorno simple de datos combinados de corte transversal y de series temporales, pero pierde significación en la mayoría (aunque no en todas) de las especificaciones una vez que se incluyen efectos fijos de país.

Por el contrario, Lei & Michaels (2014) consideran los efectos del descubrimiento de yacimientos petrolíferos gigantes, utilizando modelos que incluyen efectos fijos de país y de año. Encuentran que estos importantes descubrimientos de petróleo aumentan la incidencia del conflicto armado en alrededor de 5–8 puntos porcentuales en comparación con una probabilidad de referencia de unos 10 puntos porcentuales. En países con historias recientes de violencia política, el efecto es mucho más fuerte.

La correlación transnacional entre petróleo y conflicto civil sigue siendo objeto de controversia. Sin embargo, los estudios que incorporan datos subnacionales sobre la ubicación de los depósitos de recursos informan de manera consistente un fuerte vínculo entre el petróleo (y a veces otros minerales) y los inicios de conflicto, particularmente cuando se centran en países de ingresos bajos y medios y tienen en cuenta la relación en forma de U sugerida por primera vez por Collier & Hoeffler (1998).

MIRANDO HACIA ADELANTE

Hay evidencia considerable que respalda tres afirmaciones generales sobre los efectos condicionados de la riqueza en recursos naturales: que niveles más altos de ingresos petroleros conducen a gobernantes y regímenes autoritarios más duraderos; que un mayor ingreso petrolero aumenta la probabilidad de ciertos tipos de corrupción gubernamental; y que niveles moderadamente altos de riqueza petrolera, y posiblemente otros tipos de riqueza en recursos, tienden a desencadenar o sostener el conflicto cuando se encuentran en regiones dominadas por grupos étnicos marginados, particularmente en países de ingresos bajos y medios.

Es práctica estándar en las ciencias sociales plantear preguntas sobre la validez de las afirmaciones causales que se apoyan en datos observacionales. También es posible especificar las condiciones bajo las cuales una medida de riqueza en recursos —o para el caso, cualquier variable independiente— pierde significación estadística. Aun así, es difícil encontrar explicaciones alternativas con respaldo empírico para las fuertes correlaciones entre más petróleo y menos democracia, más corrupción y más conflicto civil. Hay poca evidencia de que estos resultados condujeran a una mayor riqueza en recursos; por el contrario, casi con certeza reducen el ingreso de un país proveniente de su sector extractivo, volviéndolo menos abundante en recursos.

Hay al menos tres enigmas sin resolver acerca de la maldición de los recursos. El primero es el alcance del efecto de los recursos. La mayoría de los investigadores se han centrado en los efectos de la riqueza en recursos sobre el crecimiento económico o sobre los tres resultados mencionados anteriormente; pero la base de recursos naturales de un país también podría estar afectando otras dimensiones de la vida política y social, como la situación de las mujeres (Assaad 2004, Ross 2008, Do et al. 2011), las tendencias demográficas (Bearce & Hutnick 2011), la propagación del VIH/SIDA (de Soysa & Gizelis 2013), el conflicto y la co-

operación internacionales (Ross & Voeten 2012, Caselli et al. 2013, Colgan 2013) y los niveles de transparencia gubernamental (Egorov et al. 2009, Kolstad & Wiig 2009, Williams 2011).

Los estudiosos que aborden estos temas deberían liberarse de la estrecha cuestión de si existe una "maldición". Hay muchas preguntas interesantes sobre las consecuencias de la base de recursos de un país además de si el coeficiente de regresión de una variable de "riqueza en recursos" lleva signo negativo. Los científicos sociales que estudian los efectos de otros fenómenos importantes —la diversidad étnica, los legados coloniales, las instituciones parlamentarias, etc.— suelen buscar conocimiento sobre la gama completa de resultados, ya sean beneficiosos, perjudiciales o ninguna de las dos cosas. El estudio de la riqueza en recursos debería ser igualmente de mentalidad amplia acerca de qué constituye un resultado interesante.

Un segundo enigma se refiere a los mecanismos y las condiciones. Muchos estudios ofrecen teorías sobre los procesos que vinculan los recursos con diferentes resultados, o sobre las condiciones bajo las cuales es más probable que ocurran. Sin embargo, pocos han intentado distinguir entre estos mecanismos y condiciones para ver cuáles son válidos. Distinguir entre estas condiciones y mecanismos es un desafío empírico, porque a menudo tienen implicaciones observables similares.

Una forma de ganar ventaja sobre esta cuestión sería investigar por qué diferentes minerales parecen tener efectos diferentes —o, de manera más acotada, por qué el petróleo parece tener ciertos efectos mientras que otros minerales no los tienen. Dado que los minerales varían en muchas dimensiones potencialmente relevantes —por ejemplo, en sus características físicas, los ingresos que generan, la volatilidad de sus mercados, el grado en que están controlados por empresas estatales y la intensidad de mano de obra de sus procesos de extracción— estas comparaciones podrían ayudar a los investigadores a desarrollar teorías más generales que expliquen por qué diferentes tipos de recursos, con diferentes características, conducen a resultados diferentes.

El enigma final es qué se debería hacer. Muchos estudiosos han desarrollado ideas sobre intervenciones de política, incluida una mayor transparencia, fondos de estabilización y ahorro, participación comunitaria, pagos en efectivo a los ciudadanos y sistemas alternativos de impuestos y regalías (Humphreys et al. 2007, Collier 2010, Barma et al. 2011, Moss 2012, Ross 2012). Sin embargo, tenemos poco conocimiento sistemático sobre qué políticas funcionan y bajo qué condiciones. En la última década, la investigación sobre el impacto de las políticas en otros ámbitos —como la educación y la atención de la salud—

ha avanzado rápidamente; sin embargo, prácticamente no existe trabajo comparable sobre el impacto de las políticas en el sector extractivo. En los próximos cinco años, un gran número de países de ingresos bajos y medios, particularmente en África, podría convertirse en exportador de petróleo o gas natural. La necesidad de asesoramiento político basado en evidencia es más urgente que nunca.

DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN

El autor no tiene conocimiento de ninguna afiliación, membresía, financiación o tenencia financiera que pudiera percibirse como un factor que afecte la objetividad de esta revisión.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos especiales a Wilson Prichard y a los editores de Annual Review of Political Science por sus útiles sugerencias.

REFERENCIAS

Ahmadov AK. 2014. Oil, democracy, and context: a meta-analysis. Comp. Polit. Stud. 47(9):1211–37 Ahmed FZ. 2012. The perils of unearned foreign income: aid, remittances, and government survival. Am. Polit. Sci. Rev. 106(1):146–65 Al-Ubaydli O. 2012. Natural resources and the tradeoff between authoritarianism and development. J. Econ. Behav. Organ. 81:137–52 Alexeev M, Conrad R. 2009. The elusive curse of oil. Rev. Econ. Stat. 91(3):586–98 Alexeev M, Conrad R. 2011. The natural resource curse and economic transition. Econ. Syst. 35(4):445–61 Andersen JJ, Aslaksen S. 2008. Constitutions and the resource curse. J. Dev. Econ. 87(2):227–46 Andersen JJ, Aslaksen S. 2013. Oil and political survival. J. Dev. Econ. 100(1):89–106 Andersen JJ, Johannesen N, Lassen DD, Paltseva E. 2013. Petro rents and hidden wealth: evidence from bank deposits in tax havens. Econ. Policy Res. Unit Work. Pap. No. 2013-03, Copenhagen, Denmark Andersen JJ, Ross ML. 2014. The big oil change: a closer look at the Haber-Menaldo analysis. Comp. Polit. Stud. 47(7):933–1021 Angrist J, Kugler A. 2008. Rural windfall or a new resource curse? Coca, income, and civil conflict in Colombia. Rev. Econ. Stat. 90(2):191–215 Anthonsen M, Löfgren Å, Nilsson K, Westerlund J. 2012. Effects of rent dependency on quality of government. Econ. Governance 13(2):145–68 Arezki R, Brückner M. 2011. Oil rents, corruption, and state stability: evidence from panel data regressions. Eur. Econ. Rev. 55(7):955–63 Arezki R, Gylfason T. 2013. Resource rents, democracy, corruption and conflict: evidence from sub-Saharan Africa. J. Afr. Econ. 22(4):552–69 Arezki R, van der Ploeg F. 2011. Do natural resources depress income per capita? Rev. Dev. Econ. 15(3):504–21 Asher S, Novosad P. 2014. Dirty politics: natural resource wealth and politics

in India. Unpublished manuscript Aslaksen S. 2010. Oil as sand in the democratic machine? J. Peace Res. 47(4):421–31 Aspinall E. 2007. The construction of grievance: natural resources and identity in a separatist conflict. J. Confl. Resolut. 51(6):950–72 Assaad R. 2004. Why did economic liberalization lead to feminization of the labor force in Morocco and de-feminization in Egypt? Presented at Cent. Arab Women Training Res. (CAWTAR) and Mediterranean Dev. Forum (MDF), Nov. Auty RM. 1993. Sustaining Development in the Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London: Routledge Barma N, Kaiser K, Le TM, Viñuela L. 2011. Rents to Riches? Washington, DC: World Bank Barro RJ. 1999. Determinants of democracy. J. Polit. Econ. 107(6):S158–83 Basedau M, Lay J. 2009. Resource curse or rentier peace? The ambiguous effects of oil wealth and oil dependence on violent conflict. J. Peace Res. 46(6):757–76 Basedau M, Richter T. 2014. Why do some oil exporters experience civil war but others do not? A qualitative comparative analysis of net oil-exporting countries. Eur. Polit. Sci. Rev. 6(4):549–74 Bates R, Lien D-HD. 1985. A note on taxation, development, and representative government. Polit. Soc. 14(2):53–70 Bazzi S, Blattman C. 2013. Economic shocks and conflict: evidence from commodity prices. Am. Econ. J. Macroecon. 6(4):1–38 Bearce D, Hutnick JAL. 2011. Toward an alternative explanation for the resource curse: natural resources, immigration, and democratization. Comp. Polit. Stud. 44(6):689–718 Beblawi H. 1987. The rentier state in the Arab world. In The Rentier State, ed. H Beblawi, G Luciani, pp. 49–62. New York: Croom Helm Beck T, Laeven L. 2006. Institution building and growth in transition economies. J. Econ. Growth 11:157–86 Bellin E. 1994. The politics of profit in Tunisia: utility of the rentier paradigm? World Dev. 22(3):427–36

Bellows J, Miguel E. 2009. War and local collective action in Sierra Leone. J. Public Econ. 93(11–12):144–57 Bermeo S. 2011. Foreign aid and regime change: a role for donor intent. World Dev. 39(11):2021–31 Besley T, Persson T. 2010. State capacity, conflict, and development. Econometrica 78(1):1–34 Besley T, Persson T. 2011. The logic of political violence. Q. J. Econ. 126:1411–45 Bhattacharya S, Hodler R. 2010. Natural resources, democracy, and corruption. Eur. Econ. Rev. 54:608–21 Bjorvatn K, Naghavi A. 2011. Rent seeking and regime stability in rentier states. Eur. J. Polit. Econ. 27(4):740– Bohn H, Deacon RT. 2000. Ownership risk, investment, and the use of natural resources. Am. Econ. Rev. 90(3):526–49 Boix C. 2003. Democracy and Redistribution. New York: Cambridge Univ. Press Boschini AD, Pettersson J, Roine J. 2007. Resource curse or not: a question of appropriability. Scand. J. Econ. 109(3):593–617 Brautigam D, Fjeldstad O-H, Moore M. 2008. Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent. New York: Cambridge Univ. Press Brollo F, Nannicini T, Perotti R, Tabellini G. 2013. The politi-

cal resource curse. Am. Econ. Rev. 103(5):1759– Brückner M, Ciccone A, Tesei A. 2012. Oil price shocks, income, and democracy. Rev. Econ. Stat. 94(2):389–99 Brunnschweiler C, Bulte E. 2009. Natural resources and violent conflict: resource abundance, dependence, and the onset of civil wars. Oxf. Econ. Pap. 61:651–74 Bueno de Mesquita B, Smith A. 2010. Leader survival, revolutions, and the nature of government finance. Am. Polit. Sci. Rev. 54(4):936–50 Buhaug H, Gates S, Lujala P. 2009. Geography, rebel capability, and the duration of civil conflict. J. Confl. Resolut. 53(4):544–69 Bulte E, Damania R, Deacon RT. 2005. Resource intensity, institutions, and development. World Dev. 33(7):1029–44 Busse M, Gröning S. 2013. The resource curse revisited: governance and natural resources. Public Choice 154(1–2):1–20 Caselli F, Cunningham T. 2009. Leader behaviour and the natural resource curse. Oxf. Econ. Pap. 61:628–50 Caselli F, Michaels G. 2013. Do oil windfalls improve living standards? Evidence from Brazil. Am. Econ. J. Appl. Econ. 5(1):208–38 Caselli F, Rohner D, Morelli M. 2013. The geography of interstate wars. NBER Work. Pap. No. 18978 Caselli F, Tesei A. 2011. Resource windfalls, political regimes, and political stability. NBER Work. Pap. No. 17601 Chaudhry KA. 1989. The price of wealth: business and state in labor remittance and oil economies. Int. Organ. 43(1):101–45 Chaudhry KA. 1997. The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press Cheibub JA, Gandhi J, Vreeland JR. 2010. Democracy and dictatorship revisited. Public Choice 143(1–2):1–35 Colgan J. 2013. Petro-Aggression: When Oil Causes War. New York: Cambridge Univ. Press Collier P. 2010. The Plundered Planet. New York: Oxford Univ. Press Collier P, Hoeffler A. 1998. On economic causes of civil war. Oxf. Econ. Pap. 50:563–73 Collier P, Hoeffler A, Rohner D. 2009. Beyond greed and grievance: feasibility and civil war. Oxf. Econ. Pap. 61:1–27 Collier P, Sambanis N. 2005. Understanding Civil War: Evidence and Analysis. Washington DC: World Bank Cotet A, Tsui KK. 2013. Oil and conflict: What does the cross country evidence really show? Am. Econ. J. Macroecon. 5(1):49–80 Crystal J. 1990. Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar. New York: Cambridge Univ. Press Cuaresma JC, Oberhofer H, Raschky P. 2010. Oil and the duration of dictatorships. Public Choice 148(3– 4):505–30 Cust J, Harding T. 2013. Institutions and the location of oil exploration. OxCarre Res. Pap. No. 127 Cuvelier J, Vlassenroot K, Olin N. 2013. Resources, conflict, and governance: a critical review. Extr. Ind. Soc. 1(2):340–50

Dal Bó E, Dal Bó P. 2011. Workers, warriors, and criminals: social conflict in general equilibrium. J. Eur. Econ. Assoc. 9(4):646–77 de Soysa I. 2002. Ecoviolence: shrinking pie or honey pot? Glob. Environ. Polit. 2(4):1–34 de Soysa I, Gizelis T-I. 2013. The natural resource curse and the spread of HIV/AIDS, 1990–2008. Soc. Sci. Med. 77(1):90–96 Do Q-T,

Levchenko AA, Raddatz C. 2011. Engendering trade. Tech. Rep. 5777. World Bank,Washington DC Dube O, Vargas J. 2013. Commodity price shocks and civil conflict: evidence from Colombia. Rev. Econ. Stud. 80(4):1384–1421 Dunning T. 2008. Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes. New York: Cambridge Univ. Press Egorov G, Guriev S, Sonin K. 2009. Why resource-poor dictators allow freer media. Am. Polit. Sci. Rev. 103(4):645–68 Esteban J, Mayoral L, Ray D. 2012. Ethnicity and conflict: an empirical study. Am. Econ. Rev. 102(4):1310–42 Fearon JD. 2004. Why do some civil wars last so much longer than others? J. Peace Res. 41(3):275–303 Fearon JD, Laitin DD. 2003. Ethnicity, insurgency, and civil war. Am. Polit. Sci. Rev. 97(1):75–90 Fish MS. 2005. Democracy Derailed in Russia. New York: Cambridge Univ. Press Frankel JA. 2012. The natural resource curse: a survey of diagnoses and some prescriptions. In Commodity Price Volatility and Inclusive Growth in Low-Income Countries, ed. R Arezki, C Patillo, MQ Min Zhu, pp. 7–34. Washington, DC: Int. Monet. Fund Gandhi J, Przeworski A. 2007. Authoritarian institutions and the survival of autocrats. Comp. Polit. Stud. 40(11):1279–301 Gassebner M, Lamla MJ, Vreeland JR. 2012. Extreme bounds of democracy. J. Confl. Resolut. 57(2):171–97 Gause FG III. 1994. Oil Monarchies: Domestic Security Challenges in the Arab Gulf States. New York: Counc. Foreign Relat. Press Gervasoni C. 2010. A rentier theory of subnational regimes. World Polit. 62(2):302–40 Gleditsch NP. 2012. Whither the weather? Climate change and conflict. J. Peace Res. 49(1):3–9 Glynn AN. 2009. Does oil cause civil war because it causes state weakness? Unpublished manuscript, Dep. Polit. Sci., Emory Univ. Goldberg E, Wibbels E, Mvukiyehe E. 2008. Lessons from strange cases: democracy, development, and the resource curse in the U.S. states. Comp. Polit. Stud. 41(4–5):477–514 Greene K. 2010. The political economy of authoritarian single-party dominance. Comp. Polit. Stud. 43(7): 807– Gurses M. 2011. Elites, oil, and democratization: a survival analysis. Soc. Sci. Q. 92(1):164–84 Haber S, Menaldo V. 2011. Do natural resources fuel authoritarianism? A reappraisal of the resource curse. Am. Polit. Sci. Rev. 105(1):1–24 Harwell E, Farah D, Blundell A. 2011. Forests, Fragility, and Conflict: Overview and Case Studies. Washington DC: Prog. Forests, World Bank Herb M. 2005. No representation without taxation? Rents, development, and democracy. Comp. Polit. 37(3):297–317 Hertog S. 2007. Shaping the Saudi state: human agency's shifting role in rentier-state formation. Int. J. Middle East Stud. 39:539–63 Humphreys M. 2005. Natural resources, conflict, and conflict resolution: uncovering the mechanisms. J. Confl. Resolut. 49(4):508–37 Humphreys M, Sachs J, Stiglitz JE. 2007. Escaping the Resource Curse. New York: Columbia Univ. Press Hunziker P, Cederman LE. 2012. No extraction without representation: petroleum production and ethnonationalist conflict. Unpublished manuscript Isham J, Woolcock M, Pritchett L, Busby

G. 2005. The varieties of the rentier experience: how natural resource export structures affect the political economy of growth. World Bank Econ. Rev. 19(2):141–74 Janus T. 2012. Natural resource extraction and civil conflict. J. Dev. Econ. 97:24–31 Jensen N, Wantchekon L. 2004. Resource wealth and political regimes in Africa. Comp. Polit. Stud. 37(9): 816– Jones Luong P, Weinthal E. 2010. Oil Is Not a Curse: Ownership Structure and Institutions in Soviet Successor States. New York: Cambridge Univ. Press

Kaldor M, Karl TL, Said Y. 2007. Oil Wars. London: Pluto Karl TL. 1997. The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States. Berkeley: Univ. Calif. Press Kennedy R, Tiede L. 2013. Economic development assumptions and the elusive curse of oil. Int. Stud. Q. 57:760–71 Knack S. 2009. Sovereign rents and quality of tax policy and administration. J. Comp. Econ. 37:359–71 Kolstad I, Wiig A. 2009. Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? World Dev. 37(3):521–32 Koubi V, Spilker G, Böhmelt T, Bernauer T. 2013. Do natural resources matter for interstate and intrastate armed conflict? J. Peace Res. 51(2): 227–43 Kurtz MJ, Brooks SM. 2011. Conditioning the “resource curse”: globalization, human capital, and growth in oil-rich nations. Comp. Polit. Stud. 44(6):747–70 Laherrère J. 2003. Future of oil supplies. Energy Explor. Exploit. 21(3):227–67 Le Billon P. 2001. The political ecology of war: natural resources and armed conflicts. Polit. Geogr. 20:561–84 Le Billon P. 2005. Fuelling War: Natural Resources and Armed Conflicts. New York: Routledge Le Billon P. 2012. Wars of Plunder: Conflicts, Profits, and the Politics of Resources. New York: Columbia Univ. Press Lei Y-H, Michaels G. 2014. Do giant oilfield discoveries fuel internal armed conflicts? J. Dev. Econ. 110:139–57 Leite C, Weidmann J. 1999. Does Mother Nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth. Tech. Rep. WP/99/85. Int. Monet. Fund, Washington, DC Liou Y-M, Musgrave P. 2013. Refining the oil curse: country-level evidence from exogenous variations in resource income. Comp. Polit. Stud. 47(11): 1584–610 Lujala P. 2009. Deadly combat over natural resources: gems, petroleum, drugs, and the severity of armed civil conflict. J. Confl. Resolut. 53(1):50–71 Lujala P. 2010. The spoils of nature: armed civil conflict and rebel access to natural resources. J. Peace Res. 47(1):15–28 Lujala P, Gleditsch NP, Gilmore E. 2005. A diamond curse? Civil war and a lootable resource. J. Confl. Resolut. 49(4):538–62 Mahdavi P. 2015. Explaining the oil advantage: effects of natural resource wealth on incumbent reelection in Iran. World Polit. In press. doi: 10.1017/S0043887114000392 Mahdavy H. 1970. The patterns and problems of economic development in rentier states: the case of Iran. In Studies in Economic History of the Middle East, ed. MA Cook, pp. 428–67. London: Oxford Univ. Press Maystadt J-F, De Luca G, Sekeris PG, Ulimwengu J. 2014. Mineral

resources and conflicts in DRC: a case of ecological fallacy? Oxf. Econ. Pap. 66(3):721–49 McGuirk E. 2013. The illusory leader: natural resources, taxation, and accountability. Public Choice 154(3– 4):285–313 Mehlum H, Moene K, Torvik R. 2006. Institutions and the resource curse. Econ. J. 116(1):1–20 Metcalf G, Wolfram C. 2014. Cursed resources? Political conditions and oil market volatility. Energy J. In press Miller M. 2012. Economic development, violent leader removal, and democratization. Am. J. Polit. Sci. 56(4):1002–20 Miner C. 2013. Death, cell phones, and international mineral prices: violence against civilians in Africa. Unpublished manuscript Monteiro J, Ferraz C. 2010. Does oil make leaders unaccountable? Evidence from Brazil's offshore oil boom. Unpublished manuscript. http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/Does%20Oil%20Make_0.pdf Morelli M, Rohner D. 2014. Resource concentration and civil wars. NBER Work. Pap. 20129 Morrison K. 2007. Natural resources, aid, and democratization: a best-case scenario. Public Choice 131(3– 4):365–86 Morrison K. 2009. Oil, nontax revenue, and regime stability. Int. Organ. 63:107–38 Morrison K. 2013. Whither the resource curse? Perspect. Polit. 11(4):1117–25 Moss T. 2012. The Governor's Solution: How Alaska's Oil Dividend Could Work in Iraq and Other Oil-Rich Countries. Washington, DC: Cent. Global Dev. Omeje K. 2008. Extractive Economies and Conflicts in the Global South. Aldershot, UK: Ashgate

Omgba L. 2009. On the duration of political power in Africa. Comp. Polit. Stud. 42(3):416–36 Østby G, Nordås R, Rød JK. 2009. Regional inequalities and civil conflict in sub-Saharan Africa. Int. Stud. Q. 53(2):301–24 Paler L. 2013. Keeping the public purse: an experiment in windfalls, taxes, and the incentives to restrain. Am. Polit. Sci. Rev. 107(4):706–25 Poelhekke S, van der Ploeg F. 2013. Do natural resources attract FDI? Rev. Econ. Stat. 95(3):1047–65 Price SV. 2003. War and Tropical Forests. Binghamton, NY: Food Products Press Prichard W, Salardi P, Segal P. 2014. Taxation, non-tax revenue and democracy: new evidence using new crosscountry data. Int. Cent. Tax Dev. Work. Pap. No. 23 Rajan SC. 2011. Poor little rich countries: another look at the 'resource curse'. Environ. Polit. 20(5):617–32 Ramsay K. 2011. Revisiting the resource curse: natural disasters, the price of oil, and democracy. Int. Organ. 65(4):507–29 Robinson JA, Torvik R, Verdier T. 2006. Political foundations of the resource curse. J. Dev. Econ. 79(2):447–68 Ross ML. 2001a. Does oil hinder democracy? World Polit. 53(3):325–61 Ross ML. 2001b. Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia. New York: Cambridge Univ. Press Ross ML. 2003. Oil, drugs and diamonds: the varying roles of natural resources in civil war. In The Political Economy of Armed Conflict, ed. K Ballentine, J Sherman, pp. 47–72. Boulder, CO: Lynne Rienner Ross ML. 2004a. Does taxation lead to represen-

tation? Br. J. Polit. Sci. 34:229–49 Ross ML. 2004b. What do we know about natural resources and civil war? J. Peace Res. 41(3):337–56 Ross ML. 2006. A closer look at oil, diamonds, and civil war. Annu. Rev. Polit. Sci. 9:265–300 Ross ML. 2008. Oil, Islam, and women. Am. Polit. Sci. Rev. 102(1):107–23 Ross ML. 2012. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press Ross ML, Voeten E. 2012. Oil and unbalanced globalization. Unpublished manuscript Sachs J, Warner A. 1995. Natural resource abundance and economic growth. Dev. Disc. Pap. 517a, Harvard Inst. Int. Dev., Cambridge, MA Sala-i-Martin X, Subramanian A. 2013. Addressing the natural resource curse: an illustration from Nigeria. J. Afr. Econ. 22(4):570–615 Smith A. 2008. The perils of unearned income. J. Polit. 70(3):780–93 Smith B. 2004. Oil wealth and regime survival in the developing world, 1960–99. Am. J. Polit. Sci. 48(2):232–46 Smith B. 2007. Hard Times in the Land of Plenty. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press Snyder R, Bhavnani R. 2005. Diamonds, blood, and taxes: a revenue-centered framework for explaining political order. J. Confl. Resolut. 49(4): 563–97 Sorens J. 2011. Mineral production, territory, and ethnic rebellion: the role of rebel constituencies. J. Peace Res. 48(5):571–85 Tornell A, Lane PR. 1999. The voracity effect. Am. Econ. Rev. 89(1):22–46 Torvik R. 2009. Why do some resource-abundant countries succeed while others do not? Oxf. Rev. Econ. Policy 25(2):241–56 Treisman D. 2013. Income, democracy, and leader turnover. Unpublished manuscript Tsui KK. 2011. More oil, less democracy? Evidence from worldwide crude oil discoveries. Econ. J. 121(551):89– Ulfelder J. 2007. Natural resource wealth and the survival of autocracies. Comp. Polit. Stud. 40(8):995–1018 van der Ploeg F. 2011. Natural resources: curse or blessing? J. Econ. Lit. 49(2):366–420 van der Ploeg F, Poelhekke S. 2010. The pungent smell of “red herrings”: subsoil assets, rents, volatility, and the resource curse. J. Environ. Econ. Manag. 60:44–55 Vandewalle D. 1998. Libya Since Independence: Oil and State-Building. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press Vicente PC. 2010. Does oil corrupt? Evidence from a natural experiment in West Africa. J. Dev. Econ. 92(1):28–38 Wacziarg R. 2012. The first law of petropolitics. Economica 79(316):641–57 Waldner D, Smith B. 2015. Rentier states and state transformation. In The Oxford Handbook of Transformations of the State, ed. S Leibfried, E Huber, M Lange, Levy J, F Nullmeier, J Stephens. New York: Oxford Univ. Press. In press

Weinstein JM. 2007. Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence. New York: Cambridge Univ. Press Wick K, Bulte E. 2009. The curse of natural resources. Annu. Rev. Resour. Econ. 1:139–56 Wiens D. 2013. Natural resources and institutional development. J. Theor. Polit. 26(2): 197–221 Wiens D, Poast P, Clark WR. 2014. The political resource curse:

an empirical re-evaluation. Polit. Res. Q. 67:783–94 Williams A. 2011. Shining a light on the resource curse: an empirical analysis of the relationship between natural resources, transparency, and economic growth. World Dev. 39(4):490–505 Wolfers J. 2009. Are voters rational? Evidence from gubernatorial elections. Unpublished manuscript Wright J, Frantz E, Geddes B. 2015. Oil and autocratic regime survival. Br. J. Polit. Sci. 45:287–306 Yates DA. 1996. The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the Republic of Gabon. Trenton, NJ: Africa World Press Zhu J, Wu Y. 2014. Who pays more “tributes” to the government? Sectoral corruption of China’s private enterprises. Crime Law Soc. Change 61:309–33

[Nota editorial del compilador.] En el extracto PDF de esta obra se encontraban los marcadores de las notas al pie 2, 3, 4 y 5 en el cuerpo, pero el texto de esas cuatro notas no fue capturado por la extracción del documento (el PDF de la versión depositada en eScholarship omite sus pies de página). Por ello, esas cuatro notas figuran en la traducción únicamente como marcadores numerados, sin su contenido original recuperable. El resto de las notas (1, 6, 7 y 8) sí se recuperaron y se tradujeron íntegramente.

---

1. Uso “petróleo” para referirme tanto al petróleo como al gas natural, y “riqueza (o abundancia) en recursos (o petróleo)” para referirme al valor de la producción de recursos naturales (o de petróleo) de un país, sobre una base per cápita.↩

2. Para otras revisiones de esta literatura, véanse Ross (2004b, 2006), Koubi et al. (2013) y Cuvelier et al. (2013). Existe además un cuerpo de investigación separado que pregunta si la escasez de recursos renovables puede desencadenar conflictos violentos (p. ej., Gleditsch 2012, Koubi et al. 2013).↩

3. No todos están de acuerdo (Humphreys 2005). …sobornar o reprimir a los posibles rebeldes.↩

4. Otras condiciones también podrían ser pertinentes. La riqueza en recursos puede aumentar el peligro de guerra civil solo en las no democracias (Besley & Persson 2011, Basedau & Richter 2011); cuando los grupos rebeldes tienen restricciones de crédito (Janus 2012); o en países de ingresos bajos y medios, particularmente desde los años ochenta (Ross 2012).↩